

**Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos**

Distr. general
14 de diciembre de 2015
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos**Comunicación núm. 2072/2011****Decisión adoptada por el Comité en su 115º período de sesiones
(19 de octubre a 6 de noviembre de 2015)**

<i>Presentada por:</i>	V. S. (representado por Frank Deliu)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Nueva Zelandia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	27 de junio de 2010
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 5 de julio de 2011 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	2 de noviembre de 2015
<i>Asunto:</i>	Encarcelamiento de un periodista al que se declaró en desacato al tribunal por publicar información difamatoria en sitios web
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Agotamiento de los recursos internos, fundamentación de las denuncias
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Derecho a la libertad de expresión, derecho a un juicio imparcial, prohibición de la detención o reclusión arbitrarias
<i>Artículos del Pacto:</i>	9, párr. 1; 14, párr. 1; y 19, párr. 2
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	1 a 3; y 5, párr. 2 b)



Anexo

Decisión del Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (115º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación núm. 2072/2011*

Presentada por: V. S. (representado por Frank Deliu)
Presunta víctima: El autor
Estado parte: Nueva Zelandia
Fecha de la comunicación: 27 de junio de 2010

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 2 de noviembre de 2015,

Habiendo concluido el examen de la comunicación núm. 2072/2011, presentada por V. S. en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado parte,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1.1 El autor de la comunicación es V. S., nacional de Nueva Zelandia nacido en 1956, quien denuncia ser víctima de una violación por Nueva Zelandia de los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 9, párrafo 1; 14, párrafo 1; y 19, párrafo 2, del Pacto. Está representado por Frank Deliu, abogado. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 26 de agosto de 1989.

1.2 El 6 de septiembre de 2011, el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, actuando en nombre del Comité, decidió que se examinara en primera instancia la admisibilidad de la comunicación.

Antecedentes de hecho

2.1 El autor es el propietario, editor y responsable de contenidos de los sitios web www.kiwisfirst.com y www.kiwisfirst.co.nz, en los que se publican noticias relativas a asuntos judiciales y a la administración de la justicia.

* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Ahmed Amin Fathalla, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan Muhumuza Laki, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili y Margo Waterval.

2.2 El 5 de mayo de 2005, el Tribunal Superior de Auckland emitió una medida provisional por la que se impedía al autor publicar información acusatoria sobre la conducta delictiva o carente de ética, o el enriquecimiento personal injusto, de la persona designada para administrar una empresa de la que el autor era director general¹. Por medio de una decisión de fecha 13 de diciembre de 2005, el Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda confirmó la medida provisional y consideró que el autor había cometido desacato por incumplirla y lo condenó al pago de una multa. El 13 de julio de 2007, se declaró al autor en desacato por segunda vez y se lo condenó a seis semanas de prisión. El 23 de diciembre de 2008, el Tribunal Superior de Auckland determinó el carácter permanente de la medida.

2.3 El 19 de julio de 2007, el Fiscal General de Nueva Zelanda remitió una carta a la empresa del autor en la que pedía que retirase de los sitios web de kiwisfirst² determinadas publicaciones sobre magistrados del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación que se consideraban difamatorias. Asimismo, en la carta se señalaba que esos sitios web enlazaban a otro que, según se había verificado recientemente, incumplía la medida emitida por el Tribunal Superior en 2005, y se advertía de que “toda persona que haya contribuido deliberadamente a incumplir la medida... también podrá ser declarada responsable de desacato por ese incumplimiento”. El 31 de julio de 2007, el Fiscal General envió una segunda carta en la que alegaba que la información publicada en el sitio web del autor “incumplía claramente la medida”. No se adoptaron medidas ulteriores.

2.4 El 28 de enero de 2008, el Fiscal General presentó una denuncia por desacato ante el Tribunal Superior de Auckland en que solicitaba la prisión indefinida para el autor por haber seguido publicando información contra el administrador en contravención de la medida emitida en 2005. En el curso de las actuaciones por desacato ante el Tribunal Superior, el Fiscal General llamó a declarar como testigo a una abogada auxiliar de la Fiscalía General del Estado responsable de vigilar los sitios web del autor y de imprimir toda referencia al administrador. El autor señala que ella fue el único testigo de cargo y la única fuente de pruebas de la Fiscalía General. El 8 de julio de 2008, el Tribunal Superior condenó al autor a una pena de seis meses de prisión por desacato. La ejecución de la sentencia quedó en suspenso hasta el 1 de agosto de 2008, de manera que el autor pudiera retirar de los sitios web la información injuriosa, si se comprometía a no publicarla en otros sitios web; de no hacerlo así se le haría cumplir la condena.

2.5 El 9 de marzo de 2009, el Tribunal de Apelación estimó una parte del recurso del autor contra la decisión del Tribunal Superior y consideró que el Tribunal Superior había impuesto una sentencia que excedía su competencia. El Tribunal de Apelación invocó el artículo 24 e) de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990, en la que se dispone que los acusados tendrán derecho a un juicio por jurado cuando la pena correspondiente al delito que se les imputa comprenda o equivalga a una pena de prisión superior a tres meses de duración. La resolución del Tribunal Superior fue anulada por otra que imponía al autor una pena de prisión de a lo sumo seis meses, a la

¹ En agosto de 2001, el autor y la persona designada para administrar su empresa pusieron fin a su litigio civil mediante un acuerdo por el que accedían a abstenerse de interponer nuevas denuncias contra la otra parte. Tras la publicación de críticas contra el administrador y su gestión en el sitio web del autor, el primero solicitó al Tribunal Superior de Auckland que emitiera una medida para exigir al autor que suprimiera esa información, y que se prohibiera la publicación de otros comentarios que incumplieran el acuerdo.

² Según la carta, la información publicada hacía referencia a una “falta deliberada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento del juramento legal, corrupción, o a insinuaciones de que los jueces actuaban conforme a una motivación indebida o ilícita”. No obstante, en la carta no se hacía alusión expresa a la información que se consideraba difamatoria ni se rebatía la veracidad de esa información.

cual se pondría fin inmediatamente si el autor acataba la medida de 2005. El Tribunal de Apelación no admitió los motivos de apelación del autor en relación con la prohibición de segundo procesamiento por los mismos hechos al considerar que el autor incumplió la medida después del 13 de julio de 2007 y que no se le había juzgado por esos incumplimientos con anterioridad. El Tribunal de Apelación rechazó asimismo los argumentos del autor sobre la vulneración de su derecho a la justicia natural al considerar que el Tribunal Superior había actuado con imparcialidad y había determinado debidamente el ámbito de la medida que se había quebrantado, además de las expresiones publicadas que constituían un incumplimiento, para lo cual citó varios extractos de los sitios web.

2.6 El 7 de agosto de 2009, el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda conoció de un recurso de apelación contra la orden de prisión basado en que se había privado al autor injustamente de su derecho a un juicio con jurado, dado que el juicio se celebró con arreglo al procedimiento sumario ante un solo juez del Tribunal Superior. El 17 de mayo de 2010, el Tribunal Supremo resolvió estimar el recurso del autor y anuló la decisión del Tribunal de Apelación, la cual sustituyó por una resolución que imponía al autor una pena de prisión de hasta tres meses, sujeta a extinción inmediata si el autor cumplía con la medida.

2.7 El 4 de junio de 2010, el autor solicitó la revisión de la sentencia, supuestamente aportando nuevas pruebas. El 11 de junio de 2010, el Tribunal Supremo desestimó la solicitud por entender que no planteaba ninguna cuestión que no se hubiera examinado con anterioridad en relación con el recurso de apelación. El 14 de junio de 2010, se presentó una segunda solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo, y este también la desestimó el 16 de junio de 2010.

2.8 El 21 de febrero de 2008, la policía irrumpió en el domicilio del autor con una orden de registro emitida por el secretario del tribunal del distrito, y señaló que buscaban “el carné de la biblioteca del autor, una camisa de estampado hawaiano, y todo aquello que pudiera vincularlo con los presuntos terroristas de Urewera o sus abogados”. El autor sostiene que permaneció recluido en su domicilio durante cinco horas sin una orden de detención y que se le prohibió beber hasta que hubo respondido a las preguntas de la policía. El material profesional y de edición del autor fue incautado, junto con anotaciones contables personales. El autor aduce que, pese a que no se presentaron acusaciones contra él, nunca se le devolvió la mayor parte del material. El Tribunal Superior desestimó la solicitud del autor de ver una copia del documento en que se basaba la orden de registro. Asimismo, el autor denunció ante el Organismo Independiente de Denuncias contra la Policía la ejecución de la orden de registro por la policía, y solicitó que se le devolvieran los bienes incautados. El 16 de julio de 2009³, el antedicho organismo resolvió que la policía no había actuado indebidamente y comunicó al autor que debería elevar una instancia al Tribunal Superior para recuperar los bienes incautados.

La denuncia

3.1 El autor afirma que se han violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 19, párrafo 2. Alega que el intento del Fiscal General de cerrar sus sitios web se debía únicamente a que había publicado información sobre la corrupción en el sistema de justicia de Nueva Zelanda y sobre el propio Fiscal General, y que posteriormente el Gobierno intentó encarcelarlo para acallar las críticas a la judicatura y al Fiscal General. El autor señala que el Gobierno nunca rebatió la exactitud de la información que había publicado, corroborada por documentos judiciales oficiales. El autor observa asimismo que de ninguna manera incitó a que se cometieran actos de violencia o de fuerza mayor que justificaran la intervención del Gobierno para privarlo

³ Según el autor, recibió la respuesta 18 meses después de que presentara la denuncia.

de su derecho a la libertad de expresión. Alega que incumbe al Estado parte demostrar que la restricción impuesta a su libertad de expresión fue necesaria y proporcionada. A su juicio, tiene derecho a manifestar públicamente su opinión sobre el Gobierno de Nueva Zelanda y, en calidad de periodista, tiene el deber de informar a la ciudadanía acerca de asuntos que afectan a su vida cotidiana, entre ellos los casos de corrupción en los poderes judicial y ejecutivo, especialmente cuando no se ha demostrado que la información fuera difamatoria.

3.2 El autor alega que el Fiscal General nunca lo acusó de difamación ante los tribunales, sino que intentó cerrar sus sitios web por vía administrativa, sin orden o decreto judiciales y sin justificar que la publicación fuera ilegal desde el punto de vista jurídico, lo que supuso también una contravención del artículo 19, párrafo 2, del Pacto.

3.3 En relación con el proceso por desacato incoado por el Fiscal General, el autor afirma que se han violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1. El único testigo al que citó el Fiscal General, fue una abogada auxiliar de la Fiscalía General del Estado, quien declaró que su único cometido consistía en imprimir páginas de los sitios web sin emitir dictamen jurídico alguno acerca de ellas ni tan siquiera leerlas, y la única referencia procedía de ese testigo. El autor no tuvo la oportunidad de interrogar al testigo de cargo, característica importante de un juicio justo. Por lo tanto, fue privado de su derecho a la presunción de inocencia. La decisión del Tribunal Superior se fundamentó en información de sus sitios web que había sido censurada desde hacía mucho tiempo. Según el autor, el Tribunal Superior había predeterminado el resultado del juicio.

3.4 En cuanto a las actuaciones del Tribunal Supremo, el autor señala que, si bien presentó pruebas para demostrar que la Fiscalía del Estado y el Comisionado para los Nombres de Dominio habían reconocido que sus sitios web se atenían a lo dispuesto por la medida, el Tribunal Supremo se negó a estudiarlas. En su lugar, confirmó el desacato basándose en una cita descontextualizada que extrajo de los escritos de la Fiscalía, y sin pruebas que respaldaran su culpabilidad. Añade que se le impuso la pena máxima aplicable antes de que pudiera reivindicar su derecho a un juicio con jurado.

3.5 El autor afirma ser víctima de una violación del artículo 9, párrafo 1, del Pacto, puesto que fue recluido en su domicilio durante cinco horas por la policía, que presentó una orden de registro pero no indicó el nombre del secretario adjunto del tribunal del distrito que la había firmado, y porque el Tribunal Superior de Auckland desestimó su petición de ver una copia del documento en que se basaba la orden de registro. Por lo tanto, la policía no demostró que la orden de registro fuera legal y la reclusión en su domicilio no fuera arbitraria. Además, la policía confiscó sus bienes y se negó a devolvérselos pese a que no se presentaron acusaciones contra él. Añade que, si bien tres testigos presenciales habían apoyado su denuncia por reclusión ilegal, el Organismo Independiente de Denuncias contra la Policía había desestimado la denuncia sin interrogar a ninguno de ellos. En opinión del autor, el registro de su domicilio en tales proporciones sin pruebas de que tuviera “vínculos terroristas” revela que existían motivos políticos para acallar sus críticas sobre la judicatura y el Fiscal General.

3.6 El autor propone que el Comité solicite todos los recursos apropiados para velar por que pueda ejercer el periodismo en Nueva Zelanda sin temor a ser perseguido, sin menoscabo de su reputación y a salvo de futuros encarcelamientos ilícitos, y que la actuación del Estado parte sea debidamente sancionada.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1 El 1 de septiembre de 2011, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación.

4.2 El Estado parte argumenta que el autor no ha presentado sus denuncias en relación con el artículo 9 ante instancias nacionales y que, por lo tanto, no se han agotado los recursos internos. Señala que la validez de una orden de registro o la realización de un registro de manera ilegal pueden impugnarse ante los tribunales. Añade que su denuncia por interrogatorio indebido durante el registro policial fue investigada por el Organismo Independiente de Denuncias contra la Policía⁴, el cual determinó que los agentes de policía actuaron conforme a una orden debidamente emitida y estaban legitimados para limitar los movimientos del autor cuanto fuera necesario para impedir que dificultara el registro. Resolvió que el agente que no permitió al autor que preparase café hasta después de responder a las preguntas de la policía tuvo un comportamiento “desacertado”, pero que su actuación no era constitutiva de una “falta grave”. No existen fundamentos que permitan cuestionar esa conclusión, por lo que la afirmación es inadmisibles por no estar suficientemente fundamentada. Por otro lado, el Estado parte observa que la aseveración de que los bienes decomisados no le fueron devueltos se refiere al derecho a la propiedad, por lo que es inadmisibles *ratione materiae* de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo.

4.3 En cuanto a las afirmaciones del autor relativas al artículo 19, párrafo 2, sobre la solicitud del Fiscal General de que eliminara contenidos de su sitio web, el Estado parte alega que esa cuestión nunca se planteó ante los tribunales nacionales y que los recursos internos no se han agotado. Añade que la cuestión también es inadmisibles a tenor del artículo 1 del Protocolo Facultativo, puesto que nunca se accedió a esa petición, con lo que el autor no puede considerarse víctima de una verdadera vulneración.

4.4 En relación con las afirmaciones del autor sobre el artículo 14, párrafo 1, y el artículo 19, párrafo 2, relativas a los procedimientos judiciales nacionales, el Estado parte observa que el autor tiene la intención de que el Comité reexamine conclusiones relacionadas con la valoración de pruebas y la aplicación de la legislación nacional por los tribunales nacionales. A juicio del Estado parte, esa parte de la comunicación es inadmisibles por carecer de fundamentación suficiente y/o ser incompatible con el Pacto. Señala que las denuncias del autor respecto del carácter injusto de su juicio se refieren a las decisiones de los tribunales nacionales sobre las pruebas, el procedimiento y el fondo, y que el autor no ha fundamentado debidamente que haya existido injusticia o arbitrariedad manifiestas de manera que se justifique el reexamen de las decisiones del Tribunal Superior.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte

5.1 En su escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, el autor observa que, tras la presentación de su comunicación al Comité, se le ha vuelto a declarar en desacato y se le ha sentenciado a cumplir una pena de prisión por publicar una resolución que lo privaba de su derecho a un juicio con jurado en un caso notorio de “procesamiento infructuoso por terrorismo”. Sostiene que varios órganos del Gobierno han orquestado una campaña de represión en su contra.

5.2 El autor hace referencia al argumento del Estado parte de que podría haber cuestionado la fuerza legal de la orden de registro ante las instancias nacionales y argumenta que hubiera sido inefectivo y en vano. Observa que, si bien nunca se

⁴ Organismo independiente cuyos miembros, con un mandato cuasi judicial, son nombrados por el Gobernador General por recomendación del Parlamento de Nueva Zelanda.

presentaron acusaciones contra él a raíz del registro de su domicilio y su empresa de publicaciones, el Tribunal Superior desestimó su petición de ver el documento con el que el Estado había obtenido la orden de registro, de manera que nunca pudo comprobar la legitimidad de los motivos que justificaron la solicitud de la orden. En opinión del autor, resulta falso plantear que no ha agotado los recursos internos cuando el tribunal ni siquiera le permitió ver el documento en que se basaba la orden de registro. Añade que ha intentado hacer valer sus derechos por todos los cauces posibles, pero se le ha negado su derecho a juicio, en reiteradas ocasiones se han desestimado sus denuncias, y/o se le ha impuesto caución respecto de la costas procesales para imposibilitar que presentara sus casos ante los tribunales, puesto que el monto necesario para que le concedieran una fecha de comparecencia le resultaba a todas luces inasumible.

5.3 En cuanto a los argumentos del Estado parte respecto de los artículos 2 y 3 del Protocolo Facultativo, el autor alega que su solicitud obedece al propósito de que el Comité examine si el comportamiento de los funcionarios que adoptaron las decisiones fue correcto, y no a un mero intento de que se reexaminen las conclusiones de hecho y la aplicación de la legislación nacional. Menciona que cabe establecer una distinción entre la resolución propiamente dicha y el procedimiento judicial que condujo a su adopción o la conducta de los jueces durante el procedimiento.

5.4 En relación con el argumento del Estado parte de que la devolución de sus bienes confiscados queda abarcada en el ámbito del derecho a la propiedad, el autor señala que sus argumentos, lejos de girar en torno al derecho a la propiedad, constituían elementos de prueba para mostrar en mayor medida la ilegalidad que revistió la actuación de la policía durante el registro como un aspecto de los incumplimientos del artículo 9.

5.5 Por último, en relación con la alegación del Estado parte de que su afirmación relativa a la actuación del Fiscal General es inadmisibles en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo, el autor señala que los instrumentos de derechos humanos, entre ellos el Pacto, se deben interpretar de manera amplia. Añade que las tentativas son tan reprobables como los hechos consumados. Además, la actuación del Fiscal General consiguió “dejar paralizado” temporalmente su sitio web hasta que logró convencer al proveedor de alojamiento web de que las peticiones del Fiscal General eran ilícitas, y ha manchado asimismo su reputación.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2 El Comité observa, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3 El Comité toma nota de las afirmaciones del autor en relación con el artículo 19, párrafo 2, del Pacto sobre la supuesta violación de su derecho a la libertad de expresión por el Estado parte, en un intento de acallar indebidamente sus críticas de los poderes judicial y ejecutivo del Estado. El Comité toma nota, asimismo, de que el Estado parte alega que esa cuestión nunca se planteó ante los tribunales nacionales y que, por lo tanto, no se han agotado los recursos internos. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que, si bien no existe obligación de agotar los recursos internos que no tengan posibilidades de prosperar, los autores de las comunicaciones deben ejercer la diligencia debida para acogerse a los recursos disponibles y las meras

dudas o suposiciones sobre la efectividad de dichos recursos no eximen a los autores de agotarlos⁵. El Comité señala que, en el caso de que se trata, según la información que consta en el expediente, el autor nunca suscitó la cuestión de la libertad de expresión ante los tribunales nacionales, ni en el contexto de las actuaciones por desacato iniciadas contra él ni en el marco de los procedimientos de apelación, y que no ha justificado que los recursos disponibles hubieran sido ineficaces a este respecto. En estas circunstancias, y al no disponerse de más información, el Comité declara esa parte de la comunicación inadmisibles de conformidad con el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.4 En relación con las afirmaciones del autor respecto del artículo 14, párrafo 1, acerca de las trabas a un juicio imparcial durante las actuaciones por desacato, el Comité toma nota del argumento del Estado parte de que esas alegaciones son inadmisibles porque se refieren a la valoración de las pruebas y a la aplicación de la legislación nacional por los tribunales nacionales. Recuerda su jurisprudencia en el sentido de que corresponde a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a no ser que pueda demostrarse que la evaluación o la aplicación fue claramente arbitraria o equivalente a denegación de justicia⁶. El Comité ha examinado los elementos presentados por el autor, entre ellos las decisiones del Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo, y considera que ese material no aporta pruebas suficientes que permitan respaldar la conclusión de que las actuaciones judiciales adolecieran de esas deficiencias. Por lo tanto, el Comité considera que el autor no ha fundamentado suficientemente sus afirmaciones a efectos de la admisibilidad y declara inadmisibles esa parte de la comunicación en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.5 Por lo que respecta a las afirmaciones del autor en relación con el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, el Estado parte afirma que el autor nunca cuestionó la validez de la orden de registro ante los tribunales nacionales. El autor ha argumentado que hubiera sido inefectivo y en vano, habida cuenta de que se le negó la posibilidad de ver el documento en que se basaba la orden de registro. No obstante, el Comité considera que ese hecho no basta por sí solo para justificar el nulo intento del autor de presentar ante los tribunales nacionales distintas cuestiones relativas al registro de su domicilio. Por lo tanto, el Comité concluye que no se han agotado los recursos internos respecto de esa reclamación y la declara inadmisibles en virtud del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

7. Por lo tanto, el Comité decide:

- a) Que la comunicación es inadmisibles en virtud de los artículos 2 y 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo;
- b) Que la decisión se ponga en conocimiento del autor de la comunicación y del Estado parte.

⁵ Véanse, entre otras, las comunicaciones núm. 1511/2006, *García Perea c. España*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 27 de marzo de 2009, párr. 6.2; y núm. 1639/2007, *Zsolt Vargay c. el Canadá*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 28 de julio de 2009, párr. 7.3.

⁶ Véanse, entre otras, las comunicaciones núm. 1622/2007, *L. D. L. P. c. España*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 26 de julio de 2011, párr. 6.3, y núm. 2211/2012, *L. F. c. Nueva Zelandia*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 30 de marzo de 2015, párr. 6.4.